REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SESENTA Y NUEVE CIVIL MUNICIPAL HOY CINCUENTA Y UNO DE
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veintidós (2022)

PROCESO	CONSTITUCIONAL (ACCIÓN DE TUTELA)
DEMANDANTE	MARÍA CLARA CASTILLA DE GARCÍA
DEMANDADOS	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
RADICADO	110014003069 2022 00542 00

Agotado el trámite establecido por la Ley se procede a emitir fallo dentro de la acción de tutela de la referencia en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

La señora MARIA CLARA CASTILLA DE GARCIA, a través de apoderado judicial, imploró el resguardo de sus garantías supraleales al debido proceso y de petición, presuntamente vulnerados por la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C., en virtud a que no le asigna fecha, hora y forma de acceso para que se realice la audiencia de forma virtual y poder ejercer en debida forma el derecho de defensa respecto del fotocompando No. 11001000000030675013.

Asevera que ha intentado en varias oportunidades el agendamiento de la audiencia, pero no ha sido posible, como consta en derecho de petición que presentó a la accionada.

Por lo anterior, solicitó se ordene a la entidad demandada que informe la fecha, hora y forma de acceso para llevar a cabo la audiencia en forma virtual.

TRÁMITE

Recepcionada la presente queja a través de la oficina de reparto, por auto del 7 de abril del año en curso, se dispuso su admisión, ordenando para tal efecto la notificación de dicha determinación a la accionada.

La Tutela fue contestada por la Directora de Representación Judicial de la Secretaría accionada quien pidió se declare la improcedencia de la acción por cuanto el derecho de petición no es el mecanismo para impulsar el proceso coactivo pues lo solicitado debió

hacerse al interior del expediente. Seguidamente explica el trámite de las infracciones de las normas de tránsito y afirmó que la actora persigue el impulso del proceso o por medio de un derecho de petición y al no recibir respuesta acude a este medio constitucional y no conforme a las ritualidades que establece la Ley 906 de 2004. Es enfática al señalar que para discutir este tipo de contravenciones se encuentra la Jurisdicción Contencioso Administrativa y reiteró la improcedencia de la acción por no haberse agotado previamente ese trámite.

Igualmente, indicó que:

“Es por ello Señor Juez, que respecto a la prueba de los pantallazos que presenta el apoderado de la parte accionante su escrito de tutela, es pertinente indicar que estas mismas pruebas fueron presentadas para otras acciones de tutela interpuestas por el apoderado de la Sociedad Disrupción al Derecho (se puede evidenciar tanto en las acciones de tutela que se mencionan en el párrafo anterior, como en otras tutelas presentadas con anterioridad; por mencionar algunas: 2022-00151 JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA accionante EDWAR FERNANDO MOYANO MONTAÑEZ / DISRUPCION AL DERECHO S.A.S., 2022-00171 JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ accionante ANGELA CRISTINA PRADILLA / DISRUPCIÓN AL DERECHO S.A.S., 2022-0025 JUZGADO 48 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA accionante WILMER FABIAN MUNAR MARIN / DISRUPCION AL DERECHO S.A.S., las cuales se adjuntan), evidenciándose en todos los escritos que los pantallazos son de la misma hora e idénticos, por lo que se reitera que estas pruebas no se pueden tomar como agotamiento de los mecanismos con los que la accionante contaba para dicho agendamiento”

CONSIDERACIONES

Sabido es que el objeto de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, *“cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares”* (Artículo 1, Decreto 2591 de 1991), razón por la cual éste mecanismo excepcional *“se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión”* (C.C. T-130 de 2014).

En el asunto en análisis, la accionante, a través de esta salvaguarda pretende que se le asigne e informe la fecha, hora y forma de acceso para llevar a cabo la audiencia de impugnación del fotocomparendo No. 11001000000030675013 en forma virtual, petición de la cual no es dable emitir pronunciamiento ni estudiar su procedibilidad, por cuanto no existe prueba siquiera sumaria que determine la

presunta amenaza o violación de un derecho fundamental. En asuntos de similares contornos indicó el Tribunal Constitucional que:

“En este orden de ideas, atendiendo a las consideraciones expuestas anteriormente, la Sala encuentra que en el presente caso no existe ninguna conducta concreta, activa u omisiva, que haya podido concluir con la supuesta afectación de los derechos fundamentales alegados por la peticionaria, y a partir de la cual se puedan impartir órdenes para la protección del agenciado y su madre, o hacer un juicio de reproche a la entidad accionada.

(...)

En consecuencia, analizar en este caso la existencia de una posible afectación a los derechos fundamentales invocados por la actora resultaría inocuo, pues si no existe el hecho generador de la presunta afectación, no hay vulneración o amenaza a garantía fundamental alguna que se pudiera estudiar, motivo por el cual, la acción de tutela elevada por la señora Cardona de Díaz es improcedente”. (C.C. T-130/2014).

Así las cosas, ante la inexistencia de acción u omisión que vulnere o amenace los derechos de la actora se negará la presente acción de tutela.

Y en gracia de discusión, la acción constitucional tampoco halla prosperidad por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, conforme pasa a explicarse.

El artículo 86 de la Carta Política ha establecido como mecanismo procesal específico y directo la acción de tutela cuya finalidad se encamina a lograr la eficaz, concreta e inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o quebrantados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en las situaciones y bajo las condiciones específicamente previstas en el decreto que la reglamentó.

La tutela entonces, no tiene finalidad distinta que buscar la protección de los derechos fundamentales cuando estos se vean amenazados por situaciones de hecho, por actos u omisiones que implique su desconocimiento o trasgresión. Por consiguiente, este mecanismo no puede utilizarse cuando se dispone de otros medios para su reconocimiento puesto que la tutela no constituye un procedimiento alternativo, adicional o complementario para alcanzar fines u objetivos diferentes para los cuales fue instituida.

Hechas las precisiones que preceden, entra el Despacho a decidir.

PROBLEMA JURÍDICO Y CASO CONCRETO

Censura el reclamante que Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, no le ha asignado fecha y forma de acceso a la audiencia estipulada en los artículos 1351, 1362, 1373 y 1424 de la Ley 769 de 2002, por lo que le vulnera el derecho al debido proceso y, de entrada, se advierte que se negará la acción de tutela presentada pues, no se observa vulneración de las garantías supralegales aducidas, como pasa a exponerse:

Sea lo primero recordar que la Corte Constitucional en sentencia T-010 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos se dijo que frente al debido proceso

“(...) es un derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Carta Política, el cual se debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas con el fin de que todos los integrantes de la comunidad nacional, en virtud del cumplimiento de los fines esenciales del Estado, puedan defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Constitución^[51].

La jurisprudencia^[52] de esta Corte ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados^[53] (sin negrillas en el texto original)

Del mismo modo ha señalado que existen unas garantías mínimas en virtud del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes: “(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las

decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso. ^{154]}

En el asunto en análisis, lo perseguido es que se le informe fecha, hora y forma de acceso para que se realice la audiencia de forma virtual, la cual se encuentra estipulada en los 1351, 1362, 1373 y 1424 de la Ley 769 de 2002, con el fin de debatir el comparendo No. 11001000000030675013; entonces, es menester indicar que en el numeral 3° del artículo 136 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, establece que *"[s]i el inculpado rechaza la comisión de la infracción, deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles"*.

Mírese que a través de la Ley 1843 de 2017 se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones, en la cual se encuentra el procedimiento ante la comisión de una contravención detectada por el sistema de ayudas tecnológicas, siendo el artículo 8° que reza:

"El envío se hará por correo y/o correo electrónico, en el primer caso a través de una empresa de correos legalmente constituida, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la validación del comparendo por parte de la autoridad, copia del comparendo y sus soportes al propietario del vehículo y a la empresa a la cual se encuentra vinculado; este último caso, en el evento de que se trate de un vehículo de servicio público. En el evento en que no sea posible identificar al propietario del vehículo en la última dirección registrada en el RUNT, la autoridad deberá hacer el proceso de notificación por aviso de la orden de comparendo."

*Una vez allegada a la autoridad de tránsito del respectivo ente territorial donde se detectó la infracción con ayudas tecnológicas se le enviará al propietario del vehículo la orden de comparendo y sus soportes en la **que ordenará presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los once (11) días hábiles siguientes a la entrega del comparendo, contados a partir del recibo del comparendo en la última dirección registrada por el propietario del vehículo en el Registro Único Nacional de Tránsito, para el inicio del proceso contravencional, en los términos del Código Nacional de Tránsito.**"* (Se resalta)

Descendiendo al *sub-litem*, quedó probado que la señora MARIA CLARA CASTILLA DE GARCIA fue objeto de sanción por el incumplimiento de las normas de tránsito, siendo acreedor del fotoccomparendo No. 11001000000030675013 del 1 de diciembre de 2021 y que no conforme de la imposición de la sanción, ha tratado de acceder a la audiencia de impugnación VIRTUAL dentro del proceso contravencional de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1843 de 2017.

Sin embargo, no se pudo determinar la fecha de notificación de dicha sanción, para abrirle pasó a la acción de tutela, pues es imposible establecer si la accionada

se encuentra vulnerado el plazo estipulado en el artículo 8° de la Ley 1843 de 2017, para la asignación de la audiencia de impugnación del fotocomparendo.

Ahora bien, arguye la actora que ha intentado en varias ocasiones la asignación de la audiencia a través de la plataforma web implementada por la secretaría convocada, manifestación que no es de recibo por parte esta Agencia Judicial, dado que del material probatorio arrimado al plenario, se observan sendos pantallazos de ingreso al sitio de asignación de la vista pública de impugnación, pero que no concuerda con lo indicado en el hecho séptimo del escrito tutelar, es decir, que trato de ingresar el día 7 de enero y 8 de marzo de 2022, pues lo acreditado en el expediente trata de las fechas 17, 20, 24, 28, y 31 de enero, 2, 4 y 7 de febrero del presente año.

Igualmente, se allegó un derecho de petición, en el cual no se puede deducir sumariamente que hay sido presentado por la accionante, por cuanto el nombre e identificación de la persona que supuestamente lo presentó se encuentra protegido con tinta negra y sumado a lo anotado el número del comparendo no es el mismo tantas veces señalado en esta acción constitucional, razón por la cual no se puede pregonar la violación al derecho de petición ni mucho menos al debido proceso.

En tal sentido, la tutelante no puede prescindir de los mecanismos con los que cuenta para la resolución de su conflicto, pues ello comportaría la desnaturalización de la acción de tutela como un mecanismo subsidiario y lo convertiría en principal. Al respecto la Corte Constitucional precisó:

"La acción de tutela no ha sido concebida como un instrumento para sustituir los demás medios de defensa judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros recursos y acciones, en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen deficientemente. Aceptar lo contrario sería admitir que el juez constitucional tomara el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que iría en contra del fin de la jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la guarda e integridad de la Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las competencias de las otras jurisdicciones. Es por eso que esta Corte estableció que dentro de las labores que le impone la Constitución "está la de señalarle a la acción de tutela límites precisos, de manera que se pueda armonizar el interés por la defensa de los derechos fundamentales con la obligación de respetar el marco de acción de las jurisdicciones establecidas."1

En consecuencia, se declarar improcedente la súplica invocada.

DECISIÓN

¹ Corte Constitucional, Sentencia T-262 de 1998

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sesenta y Nueve Civil Municipal hoy Juzgado Cincuenta y Uno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la protección implorada por la señora MARIA CLARA CASTILLA DE GARCIA, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a quienes concierne por medio expedito y eficaz. En el acto de la notificación, se hará saber a las partes que procede la impugnación del fallo en el término de los tres (3) días siguientes al de la notificación.

TERCERO: DISPONER la remisión de lo actuado ante la Corte Constitucional, en caso de no ser impugnada esta providencia.

Notifíquese y Cúmplase,

Firmado Por:

**Luis Guillermo Narvaez Solano
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 069
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3fa001495dd450f3f985f6db55e9bea78d9aaf9b3d202b3bbd37b80332f41485**

Documento generado en 25/04/2022 09:43:28 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>